

VALLE DEL YAQUI.- La tribu Yaqui, una de las más antiguas y rebeldes de México, se seca poco a poco. Esta vez, no se trata de un exterminio como cuando resistieron a la colonización española en el valle de Sonora o como cuando murieron 25,000 al enfrentarse a terratenientes apoyados por el gobierno a principios del siglo XX, sino de un asunto más literal.

“Podemos desaparecer sin agua”, dice Tomás Rojo -vocero de los yaquis- quien ocupa este puesto desde el año pasado cuando encarcelaron a dos de sus dirigentes por defender el “derecho ancestral” al líquido vital que gradualmente les ha quitado el gobierno de su estado fronterizo con Arizona.

Protesta frente a la SCJN. Protesta frente a la SCJN.

El problema no es algo reciente: en 1952, el entonces presidente Adolfo Ruíz Cortines, redujo el porcentaje de agua que les correspondía de 840 millones de litros cúbicos anuales a 420 millones que bien administrados, les daban para tener una economía relativamente próspera basada en la siembra de trigo, alfalfa y frijol, pero desde desde el 2013, el desabasto se puso rudo.

La construcción del acueducto Independencia -que parte del Río Yaqui al Río Sonora para abastecer a la ciudad de Hermosillo- les quitó de un tirón 70 millones de metros cúbicos de agua que en palabras de la tribu significa la “ruina” económica y social de ocho pueblos indígenas, que juntos suman 45,000 habitantes.

Con menos agua, tienen problemas de salinización de las tierras y se han dejado de sembrar 6,500 hectáreas por año lo que representan pérdidas por 60,000 millones de dólares.

“Es un desastre por donde se mire”, afirma Rojo, en entrevista con este diario. “Muchos se han tenido que emplear en las maquilas por sueldos miserables o han tenido que buscar mezquite para producir carbón y de esta manera ganarse la vida aunque esto provoca deforestación y, en otros casos, aunque son menos, se han tenido que ir a Arizona, con nuestros hermanos yaquis a trabajar en los casinos”.

Del otro lado de la historia, el gobierno del estado mexicano de Sonora se ha mantenido firme con su decisión que llegó hasta los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó desde el año pasado restituir el agua a la tribu sin respuesta positiva por parte de las autoridades locales.

“No se está afectando a nadie y en cambio resolvemos un problema de desabasto”, argumentó recientemente Carlos Espinosa, secretario de la División Jurídica de Sonora. “El estado

padece en los últimos años un problema de sequía, principalmente en la región aledaña a la capital”.

Agua para otros

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una organización civil que aboga por la tribu, califica el problema entre el gobierno y la tribu como la primera guerra del agua en el país derivada de la escasez y la mala planeación de las autoridades.

“La tribu yaqui está siendo obligada a pagar por la ambición de otros”, dice Andrea Cerami, abogado del CEMDA. “Está documentado que en el recorrido del acueducto hay 200 tomas clandestinas desviadas para ranchos privados y no beneficia a Hermosillo, como afirman las autoridades y, por otro, lado se incrementó el uso industrial en otras zonas para desabasto de la capital”.

Los yaquis continúan sus protestas en defensa de su derecho al agua. Los yaquis continúan sus protestas en defensa de su derecho al agua.

Los yaquis no descartan aún un acuerdo con las autoridades, pero “su paciencia se está agotando”, afirma el vocero de la tribu. De hecho, es la primera vez que intentan arreglar un desacuerdo con las autoridades por la vía legal, pero se han topado con la pared de la justicia mexicana: poco pasa si no se acata o se vuelve un proceso lento y tedioso que puede durar meses o años, sin agua.

Protestas e intimidaciones a los yaquis

Los yaquis firmaron un pacto de protestas contra el gobierno de Sonora que desde 2010 lanzó a la tribu a bloquear carreteras y al encarcelamiento de dos de sus líderes; uno de los cuales, Mario Luna, continúa preso en la ciudad de Hermosillo, justo la ciudad blanco de una disputa por el agua.

Mario Luna

Sumaban cuatro años en esta dinámica de movilizaciones a la par de una demanda legal cuando la situación se puso color de hormiga poco después de que la Suprema Corte de Justicia pidió a las autoridades estatales consultar a los yaquis sobre la construcción del Acueducto Independencia.

Era el verano de 2014. Luna fue acusado de retener ilegalmente a otro miembro de la tribu y de robo de vehículo, se lo llevaron a la cárcel de la capital del estado, una de las de mayor índice de suicidios en el país (en los últimos meses suma 10 suicidios) y la consulta nunca se hizo.

Andrea Cerami, su abogado, asegura que el encarcelamiento no tiene sustento legal porque Luna no estuvo en el lugar de los

hechos. Además, en el supuesto de que hubiera estado, no sería una privación ilegal de la libertad sino una detención “legalmente válida” por las leyes de usos y costumbres por las que se rigen los yaquis.

“Mario es un preso político por defender el agua”, dice al litigante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

No es la primera vez que los yaquis son intimidados. En septiembre de 2011, alrededor de 2,000 policías estatales, municipales y federales les cayeron de sorpresa y retuvieron a 10 de los activistas para liberarlos una semana después. Hace unos días, también les lanzaron una bomba casera a uno de los retenes carreteros.

Tomás Rojo, vocero de la tribu, afirma que siempre hay gente encapuchada “merodeando” sus protestas. “No son de la tribu, lo sabemos porque tienen las manos blancas y peludas”.

14 de septiembre de 2015

Fuente: [Crítica](#)